

**Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la
Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía
del Gobierno****Ref: SG/2025/00767**
Ref ABC 860-2025/109115

En relación al informe solicitado por V.I. sobre el anteproyecto de "Ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa", esta Dirección General informa lo siguiente desde el punto de vista jurídico.

I. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANTEPROYECTO.**a) Competencia de la Comunidad Autónoma.**

La competencia de la Comunidad Autónoma constituye el primer y esencial presupuesto para la validez de cualquier clase de disposición, tanto legal como reglamentaria, que pretendan dictar sus órganos

El anteproyecto que informamos presenta un contenido de naturaleza heterogénea, en la medida en que presenta disposiciones en torno a la regulación de la simplificación administrativa, mercado abierto, transformación digital y calidad normativa. Sin embargo, este amplio contenido no está exento de una conexión interna coherente, en la medida en que lo que pretende es, de acuerdo con su artículo 1, es establecer los principios generales de la simplificación administrativa y adoptar medidas organizativas, procedimentales y de mejora regulatoria

Así las cosas, entendemos que los poderes legislativos de las comunidades autónomas no tienen ningún obstáculo para intervenir sobre su ordenamiento a través de normas de contenido heterogéneo, tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones, por ejemplo, en la Sentencia 136/2011, de 134 de septiembre:

“...podemos afirmar ahora que el dogma de la deseable homogeneidad de un texto legislativo no es obstáculo insalvable que impida al legislador dictar normas multisectoriales, pues tampoco existe en la Constitución precepto alguno, expreso o implícito, que impida que las leyes tengan un contenido heterogéneo. El único límite que existe en nuestro ordenamiento jurídico a las leyes de contenido heterogéneo es el previsto en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo (LA LEY 706/1984), reguladora de la iniciativa legislativa popular, que acoge como una de las causas de inadmisión de esa iniciativa «el hecho de que el texto de la proposición verse sobre materias diversas carentes de homogeneidad entre sí» [art. 5.2 c)]. Ahora bien, al margen de ese supuesto, el intentar basar la inconstitucionalidad de este tipo de normas en el hecho de no estar previstas en el texto constitucional -como hacen los Diputados recurrentes- supone invertir los términos del debate que debe circunscribirse a comprobar si, de un lado,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 1 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director General		
2			

se encuentran prohibidas; y a si, de otro lado, de no encontrarse prohibidas, sin embargo, sí se encuentran limitadas en su uso o contenido.

Descartada ya la existencia de prohibición alguna en el texto constitucional a la existencia de las leyes complejas [así denominábamos, por ejemplo, en la STC 126/1987, de 16 de julio (LA LEY 12478-JF/0000), a la Ley 5/1983, de 29 de junio (LA LEY 1450/1983), de medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria, que contenía «normas relativas a las operaciones financieras del sector público, normas de contratación y normas tributarias» (FJ 5)], multisectoriales o de contenido heterogéneo, resta por determinar si existe algún límite a su uso o contenido, debiendo responderse a esta cuestión también de forma negativa, pues la Constitución no prevé que el principio de competencia o especialidad obligue a que sólo puedan aprobarse constitucionalmente normas homogéneas que se refieran a una materia concreta. A este respecto hay que señalar que no cabe duda de que sería una técnica más perfecta la de circunscribir el debate político de un proyecto de ley a una materia específica, lo que alentaría una mayor especialización del mismo y, posiblemente, una mejor pureza técnica del resultado. Sin embargo, los reparos que pudieran oponerse a la técnica de las leyes multisectoriales, por su referencia a un buen número de materias diferentes, no dejan de ser en muchas ocasiones otra cosa que una objeción de simple oportunidad, sin relevancia, por tanto, como juicio de constitucionalidad stricto sensu, tanto más cuanto que una y otra norma legal son obra del legislador democrático.”

A partir de esa declaración del Tribunal Constitucional, y del anteproyecto de Ley presentado a informe, esta Dirección estima que el Gobierno de La Rioja es competente para aprobar el proyecto de Ley, y su vez la Comunidad Autónoma lo es para aprobar y promulgar la Ley. Sobre todo, con fundamento en los apartados 1 y 2 del artículo 8.º uno de la Ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja, en virtud del cual corresponde a la Comunidad Autónoma de La Rioja la competencia exclusiva sobre organización, estructura, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y sobre procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de La Rioja. Así se recoge expresamente en la memoria justificativa de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de 8 de septiembre de 2025.

Y ello sin perjuicio de la invocación de otros posibles títulos competenciales como pueda ser, a título de ejemplo, el fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma (artículo 8.º uno.4).

A este respecto, señalar que, la invocación de todos los títulos competenciales que legitiman la eventual aprobación por el Gobierno del proyecto de ley debe quedar expresamente recogida en la exposición de motivos, lo que sucede en el borrador remitido a esta Dirección General.

Concurren, por tanto, los títulos competenciales que habilitan a la Comunidad Autónoma de La Rioja para dictar la Ley proyectada

b) Contenido y alcance del anteproyecto.

El proyecto remitido consta de una exposición de motivos, sesenta y un artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres finales.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 2 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director General		
2			

Se estructura en una exposición de motivos, un título preliminar y cinco títulos.

Por ello, abordaremos el contenido de la norma en seis apartados que se corresponden a los títulos de la misma, además de examinar las disposiciones de cierre.

Título Preliminar: Disposiciones Generales.

Aborda el objeto, ámbito de aplicación de la Ley, deber general de simplificación del sector público y los principios generales tanto de la simplificación y racionalización administrativa como de la transformación digital y los criterios de la simplificación administrativa.

Título I. Organización administrativa para la simplificación.

Se establecen las funciones en la materia de cada uno de los niveles, y crea un grupo específico de trabajo para la simplificación. Atribuye a la Consejería competente en materia de organización de los servicios públicos la promoción la participación de las organizaciones empresariales y sociales.

Título II. Simplificación administrativa.

Se distribuye en tres capítulos.

El primero destinado a las disposiciones generales y en el que se define la simplificación administrativa y se recoge la obligación de un análisis de diseño o rediseño funcional de simplificación y digitalización antes de la regulación o modificación de un procedimiento o actuación.

El segundo, relativo a la simplificación de procedimientos, establece medidas y obligaciones concretas de simplificación procedimental respecto a la aportación de documentos, el diseño de los formularios y su puesta a disposición a la ciudadanía, los plazos máximos para resolver. Regula los efectos del silencio administrativo, establece como regla general por la estimación y relegando el silencio desestimatorio a supuestos excepcionales debidamente justificados. También se regula en este capítulo el plazo para la emisión de informes y dictámenes en los procedimientos administrativos, se promueve la agilidad en la tramitación de informes sectoriales

El tercero regula en su sección primera los principios de la intervención administrativa, de manera que se prevé con carácter general la declaración responsable y la comunicación, en lugar de las autorizaciones previas o licencias, excepto cuando lo impida norma europea o estatal, de aplicación directa o básica, o excepcionalmente, una norma autonómica con rango de Ley por razones imperiosas de interés general. Se regula la actividad de inspección y comprobación previendo que la Administración pueda requerir la aportación de la documentación que sea exigible. En la sección segunda, se regulan con carácter novedoso las entidades colaboradoras de certificación. Introduce una certificación que valida la documentación presentada por los interesados ante la Administración, y que será asumida por ésta como completa, suficiente y adecuada, sin perjuicio de sus facultades de comprobación e inspección. Se regula el Registro de entidades colaboradoras de certificación, las funciones de éstas, sus obligaciones, incompatibilidades y responsabilidad.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 3 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director General		
2			

Título III. Mercado abierto.

La regulación sigue el modelo iniciado por la Ley 6/2022, de la Comunidad de Madrid y seguido por otras Comunidades Autónomas en sus leyes más recientes. Se busca reducir trabas innecesarias a los operadores económicos. Consta de tres capítulos.

El primero relativo a los principios de no discriminación y eficacia.

El segundo capítulo desarrolla el principio de no discriminación relativo a las garantías de libre establecimiento y circulación.

El tercero desarrolla el principio de eficacia en la Comunidad Autónoma de La Rioja garantizando la libre iniciativa económica y la eficacia de todos los medios de intervención de las autoridades competentes que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias.

Título IV. Transformación digital para la simplificación.

Partiendo de la previsión de un proceso permanente de transformación digital conforme a los principios del artículo 4.2 de la Ley, se regulan el derecho de la ciudadanía a disponer de un espacio personalizado; se introduce la proactividad de la administración, la implantación de una Plataforma de Gobernanza de Datos, o el impulso del establecimiento de cuadros de mando con el objeto de proporcionar información real y permanentemente actualizada sobre el funcionamiento del ámbito de que se trate. Se recogen en la Ley, las actuaciones administrativas automatizadas, la robotización y a la inteligencia artificial aplicadas a la simplificación.

Concluye el título regulando la seguridad en materia de Administración electrónica y la asistencia en el uso de medios electrónicos.

Título V. Régimen sancionador.

Consecuencia de la transformación a un modelo de intervención administrativa basado en las declaraciones responsables y comunicaciones que exige la tipificación y sanción de las conductas vulneradoras de la legalidad en este punto. Se regula de manera detallada el régimen sancionador estableciendo su ámbito de aplicación; disposiciones generales; responsables; tipificación de las infracciones leves, graves y muy graves, definición de las permanentes y continuadas y regulación de su prescripción; clases, cuantía, graduación y prescripción de las sanciones; caducidad del procedimiento; competencia sancionadora; medidas provisionales.

Título VI. Calidad normativa

Se modifica el Capítulo I del Título III de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja relativo a la iniciativa legislativa y la potestad disciplinaria. Cabe reseñar como principales novedades:

- La Introducción de los principios de buena regulación.
- La Incorporación de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo en el proceso de elaboración y tramitación de las normas, para evaluar los efectos de la norma antes de su aprobación, y garantizar la calidad de

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 4 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director General		
2			

la norma, incorporando las aportaciones de los procesos de participación y las declaraciones de juicio emitidas por los órganos informantes.

- La Incorporación del Plan de Calidad y Simplificación Normativa y eliminación del Plan normativo anual (PNA). Por un lado, el Plan Normativo Anual pierde su sentido de planificación como consecuencia de la implantación de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, por otro lado, el Plan de Calidad y Simplificación Normativa, permitirá la revisión, simplificación y, en su caso, propuesta de refundición normativa de las disposiciones vigentes en la legislación autonómica.

Disposiciones Adicionales

Primera: Relativa al mandato de constituir el grupo de trabajo de simplificación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor.

Segunda y tercera: regulan la revisión de procedimientos y normativa para hacer efectiva la nueva regulación en materia de plazos para resolver y para informar, silencio administrativo e intervención administrativa. Se fija un plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la Ley.

Cuarta: Contiene diversas previsiones relativas a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo que no será exigible hasta que se aprueben por Consejo de Gobierno, las directrices para su elaboración que se prevén.

Quinta: Mantiene la obligación de la CAR de prestar servicios de Administración Electrónica a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y a los que voluntariamente se adhieran a esta prestación.

Sexta: Relativa al Tablón de Anuncios Electrónico.

Séptima. Sobre la puesta a disposición de la ciudadanía de nuevos canales, herramientas y medios técnicos para relacionarse con la Administración autonómica.

Disposición Transitoria

Se ocupa de la situación que se genera por la entrada en vigor de la nueva redacción de la Capítulo I del Título III de la Ley 4/2005 (la exposición de motivos habla erróneamente de derogación de esta Ley) hasta que se aprueben las Directrices de elaboración de las Memorias de Análisis de Impacto Normativo, disponiendo que, en ese espacio de tiempo, las Memorias que acompañen a los proyectos normativos, se regirán por el régimen modificado.

Disposición derogatoria

Que se refiere expresamente la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa.

Disposiciones finales

Primera: Relativa al desarrollo reglamentario.

Segunda: Relativa a la regulación del Decreto del Consejo de Gobierno por el que se establecerán los requisitos y los procedimientos de acreditación de las entidades colaboradoras de certificación y de habilitación

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 5 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director General		
2			

de entidades para la representación y se crearán los registros generales de entidades colaboradoras de certificación y de entes habilitados.

Tercera: Regula la entrada en vigor de la Ley al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

c) Documentación remitida:

- Resolución de inicio de expediente del Consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de 25 de julio de 2025.

- Memoria justificativa de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de 8 de septiembre de 2025.

- Borrador número 1 de la Ley de 25 de julio de 2025.

- Certificado de consulta previa de 19 de mayo de 2025.

- Propuesta de Plena Inclusión La Rioja para la Ley.

- Propuestas de simplificación de trámites administrativos del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja.

- Propuestas para la simplificación administrativa de la Federación de Empresas de La Rioja.

- Propuestas para la simplificación administrativa de la Asociación Riojana Empresa Familiar.

- Propuestas concretas de Lideremos La Rioja para el plan de simplificación 2025-2029 y documento “Menos Burocracia” aportado por Lideremos La Rioja.

- Certificado de información pública de 26 de agosto de 2025.

- Alegaciones de Comisiones Obreras.

- Borrador número 2 de la Ley de 5 de septiembre de 2025 elaborado tras el trámite de audiencia.

- Memoria inicial de tramitación de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de 9 de septiembre de 2025.

- Diligencia de formación de expediente de 10 septiembre de 2025.

- Solicitud de informe a esta Dirección General de 10 de septiembre de 2025.

Cumple reseñar que se han remitido, además:

- Borrador (se denomina “en Caratula de Disposición para tramitación”) sin fecha, incorporado el día 9 de septiembre de 2025, y que se entiende borrador definitivo a salvo de lo que pueda resultar del informe de esta Dirección.

- Informe de la Dirección General de Control Presupuestario de 1 de abril de 2024, para la propuesta del Plan de Simplificación Administrativa, Calidad Normativa y Mercado Abierto de La Rioja.

- Memoria económica de la Dirección General de Agenda Digital de 13 de marzo de 2025 para el Plan de racionalización administrativa, calidad normativa y mercado abierto del Gobierno de La Rioja.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 6 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director General		
2			

Estos dos últimos documentos, a los efectos que veremos a continuación al examinar el cumplimiento de trámites.

d) Cumplimiento de trámites.

El artículo 45 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros, establece que el procedimiento de elaboración de los proyectos de Ley se iniciará por el titular de la Consejería competente mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto que incluirá una exposición de motivos e irá acompañada por una memoria que deberá expresar previamente el marco normativo en que se inserta, justificar la oportunidad de la norma y la adecuación de las medias propuestas a los fines que se persiguen haciendo referencia a las consultas facultativas efectuadas y otros datos de interés para conocer el proceso de elaboración del proyecto. Se adjuntará, en su caso, un estudio económico de la norma, con especial referencia al coste y financiación de los nuevos servicios si los hubiere, o de las modificaciones propuestas; relación de disposiciones afectadas y tabla de vigencias, en la que deberá hacerse referencia expresa de las que deben quedar total o parcialmente derogadas. En todo caso, y sin perjuicio de otros informes preceptivos, los anteproyectos de ley deberán ser informados por la Dirección General de los Servicios Jurídicos y por la Secretaría General Técnica que inició el expediente.

En el caso presente, junto al borrador de anteproyecto, se remite resolución de inicio dictada el 25 de julio de 2025 por el Consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno; una memoria justificativa de 8 de septiembre de 2025 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, los certificados de consulta previa e información pública y el resultado de dichos trámites.

En la memoria de tramitación de la Secretaría General Técnica se señala con relación a los informes preceptivos:

El del Servicio de Organización e Innovación de los Servicios Públicos previsto en el artículo 4.2 del Decreto 125/2007, de 26 de octubre, no se emite porque se trata del servicio redactor de la norma y quien ha elaborado la memoria justificativa, por lo que se da por cumplido el trámite, como se refleja en la propia memoria.

Con relación al de la Dirección General de Control Presupuestario, se dice que el anteproyecto tiene un coste estimado de 3.109.912,36 €, por lo que en principio debería solicitarse informe de la mencionada DG. No obstante, este coste, ya fue informado por la DG de Control Presupuestario con ocasión de la aprobación de Plan de Simplificación, por lo que se incorpora el informe de 1 de abril de 2025 al expediente de tramitación de la Ley, dándose por cumplido el trámite. Sin embargo, y con relación a este extremo, se dice en la memoria justificativa que la aprobación de la norma no genera coste presupuestario alguno para la Administración y que el coste asociado a las medidas de transformación digital se acompañó como Memoria económica del Plan de Simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión de 8 de abril de 2025 previo informe de la Dirección General de Control Presupuestario de 1 de abril.

No obstante, esta contradicción, y dados los términos en que se manifiesta la memoria de tramitación, entendemos que está cumplido el trámite con el informe de la Dirección General de Control Presupuestario de 1 de abril de 2025 que afirma que entiende suficientemente motivada la tramitación del Plan de Simplificación

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 7 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director General		
2			

Administrativa, Calidad Normativa y Mercado Abierto de La Rioja para el periodo 2025-2029 y que estima el impacto en términos de déficit y regla de gasto de este plan en 3.075.201,62 euros en el periodo 2025-2029.

A la vista de lo expuesto cabe indicar lo siguiente:

a) De lo establecido en la Ley 8/2003 se infiere la necesidad de elaborar dos memorias, una inicial y otra final, o si se quiere, una única memoria con dos partes diferenciadas: la inicial, y la final, que debe recoger todo el iter procedimental seguido, así como las consultas efectuadas que permitan comprender el texto definitivo sometido a informe, (dictamen del Consejo Consultivo 33/02, de 28 de junio).

b) En cuanto al “estudio económico”, la memoria de tramitación elaborada por la Secretaría General Técnica señala que la aprobación de la Ley no conllevará costes directos para el Gobierno, pues las medidas se pondrán en marcha con recursos propios pero que el coste asociado a las medidas de transformación digital, según la memoria económica de la Dirección General para la Sociedad Digital de fecha 13 de marzo de 2025, que se incluyó en la tramitación del Plan de Simplificación, se estimaba en una cantidad total de 3.109.912,36 € (si bien como hemos visto, el informe de la Dirección General de Control Presupuestario para dicho Plan lo rebaja a 3.075.201,62 euros).

Sería deseable que se explicara de manera más detallada si existe o no coste derivado de la aprobación de la Ley dadas las diferentes afirmaciones contenidas en las memorias tal y como hemos puesto de relieve al hablar del informe de la Dirección General de Control Presupuestario.

c) Se contiene el análisis de simplificación administrativa del artículo 34 de la Ley 5/2014, de 20 de octubre.

d) Se valoran el impacto de género conforme al artículo 22 Ley 7/2023, de 20 de abril y el Impacto en materia de familia, infancia y adolescencia conforme al artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero y DA10ª de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre.

e) En relación a la tabla de disposiciones derogadas, se debería incluir la misma en la memoria final que será elevada al Gobierno.

En consecuencia, se considera adecuadamente tramitado el anteproyecto de Ley.

II. CONSIDERACIONES SOBRE EL TEXTO DEL ANTEPROYECTO.

Examinado el contenido concreto del borrador del anteproyecto, esta Dirección General lo informa favorablemente con las siguientes consideraciones:

La Exposición de Motivos se refiere erróneamente a la derogación de la Ley 4/2005 cuando debería hablar de la nueva redacción del Capítulo I de su Título III

En lo que se refiere al articulado:

- En el artículo 2, en su último párrafo, se sugiere incluir al principio “A los efectos de esta ley”

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 8 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo		Firmante / Observaciones	Fecha/hora
1	Director General		
2			

- Tanto en el título de la Ley como en su exposición de motivos y artículos 6 y 7, se habla de Mercado abierto sin que se concrete cuál es su concepto, se sugiere la conveniencia de recoger un concepto legal.
- En el artículo 9.3, se sugiere hablar de Consejero competente en lugar de Consejería y se plantea la conveniencia de que se resuelva a propuesta del grupo de trabajo ya que este es parte en la discrepancia.
- Artículo 13. En su apartado 2, se sugiere introducir al inicio “Salvo que una norma con rango de Ley establezca lo contrario, como regla general...”
- En su apartado 3, al referirse a la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, señalar que es la 39/2015, de 1 de octubre.
- Artículo 16. Se sugiere que se introduzca “procedimientos competencia de la Administración autonómica iniciados a solicitud del interesado...”.
- Artículo 19. Se sugiere en su apartado 2 que se inicie con la expresión “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.5, transcurrido el plazo máximo de emisión ...”.
- Artículo 20.1, referirse a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
- Artículo 21. En su apartado 3, si el régimen general (apartado 1) es de declaración responsable o comunicación, no parece que deba de ser necesaria la motivación en estos casos.
- Artículo 24.4. Es reiterativo del 23.2 cuando dice que las funciones de las entidades colaboradoras de certificación no sustituirán a las potestades propias de la Administración. Se sugiere que diga simplemente que la Administración podrá verificar las funciones y actuaciones desarrolladas por las personas interesadas.
- Artículo 25. En sus apartados 2 a y b), parece que los colegios profesionales están incluidos en el b) como personas jurídicas que son. Se sugiere que puedan ser acreditadas toda clase de personas jurídicas legalmente constituidas que cumplan con los requisitos del número 3.
- Artículo 27. En su apartado 3. Podría ser contradictorio hablar de régimen de mercado y honorarios por un lado y de tarifas por otro. Plantea la duda de si todas las entidades deben tener los mismos conceptos de tarifas, y en tal caso quién las fija y aprueba. Obviamente la cuantía de la tarifa debe de ser libre si hablamos de régimen de mercado.
- Artículo 28. Se sugiere la conveniencia de extender el régimen de incompatibilidades de los colegiados a los profesionales de las entidades en general.
- Artículo 29. En su apartado 3 no se entiende porqué la responsabilidad solidaria lo es solo si el profesional al que se le exige seguro de responsabilidad civil profesional actúa certificando en un colegio y no en una empresa.
- Artículo 32: La posibilidad genérica de limitar conforme a lo establecido en la presente Ley podría contravenir la Ley 20/2013. Por otro lado, se plantea la duda de cuáles son las limitaciones se contienen en la presente Ley.
- Artículo 35. En su apartado 3, se sugiere incluir la protección del medio ambiente.
- Artículo 47.1 Hablar de entidades colaboradoras de certificación y no de entidades colaboradoras.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.			Pág. 9 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Director General			
2			

- Artículo 55.3 c) El resarcimiento no es propiamente una sanción sino una consecuencia de la imposición de las sanciones. El decomiso es más dudoso que sea o no sanción (existen sentencias que en el ámbito penal lo consideran así).
- Artículo 60: Plantea dudas sobre la competencia para iniciar e instruir los procedimientos: hay infracciones no ligadas a la aportación de declaración responsable o comunicación como los incumplimientos de la obligación de confidencialidad o de aseguramiento por parte de las entidades colaboradoras de certificación.
- Disposición Adicional segunda 1: Cuando habla de Consejería competente en materia de organización debería añadir de los servicios públicos.

III. - CONCLUSIONES.

Primera. - La Comunidad Autónoma de La Rioja tiene competencia para dictar la presente norma al amparo de los preceptos del Estatuto de Autonomía de La Rioja aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, que hemos reseñado en el apartado I a) de este informe.

El rango de la norma proyectada es adecuado y pertinente a la finalidad que persigue.

Segunda. - El procedimiento de elaboración de la norma es ajustado al ordenamiento jurídico.

Tercera. - En lo que afecta al texto de la norma proyectada, se informa favorablemente.

Es cuanto ha de informarse al respecto, sin perjuicio de mejor criterio en Derecho.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE <small>en formato PDF/A 1.7 Firma PAdES. Custodiado en repositorio seguro del Gobierno de La Rioja.</small>			Pág. 10 / 10
Expediente	Tipo	Procedimiento	Nº Documento
00860-2025/109115	Informe	Solicitudes y remisiones generales	2025/0830739
Cargo	Firmante / Observaciones		Fecha/hora
1 Director General			
2			